



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2021-00015-00
PROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS
CONVOCADO: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL- SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE
BOGOTÁ- FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A.

La Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Administrativos, remitió solicitud de aprobación o improbación de conciliación extrajudicial, radicada bajo el número E-2020-379853 del 9 de julio de 2020, celebrada entre **ANDRES SANCHEZ LANCHEROS**, en su condición de apoderado de la convocante, y **ÁNGELA VIVIANA MOLINA MURILLO** en condición de apoderada sustituta de la convocada **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, según acta calendada el 7 de diciembre del 2020, en donde se decidió conciliar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías, de conformidad con lo dispuesto los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Las entidades convocadas, a través del **COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, propusieron conciliar el anterior concepto por la suma de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$14.535.975,00)** por concepto de mora en el pago de las cesantías definitivas.

La señora **MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS**, por intermedio de apoderado judicial, manifestó estar de acuerdo y aceptar en su totalidad la oferta conciliatoria realizada por la entidad convocada.

Como respaldo del acuerdo conciliatorio, se arribó al trámite los siguientes documentos:

- Solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial ante los Juzgados Administrativos (fls. 3-6).
- Poder conferido al abogado ANDRES SANCHEZ LANCHEROS, como apoderado del convocante (fl.7).
- Copia de la resolución 2032 del 28 de febrero del 2018 a través de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva (fls.11-16).
- Certificación de pago de cesantías expedida por la Fiduprevisora S.A. (fl.17).
- Solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas ante el Fomag (fl.19-20).
- Solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas ante la Fiduprevisora (fls. 25-26).
- Cedula de ciudadanía de la convocante (fl. 27).
- Certificación de envío de la solicitud de conciliación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídico del Estado (fl. 29-30)
- Auto admisorio de la solicitud de conciliación (fl.37).
- Poder conferido a la abogada KAREN ELIANA RUEDA AGREDO, como apoderada de la convocada (fl. 46)
- Certificado suscrito por el secretario técnico del comité de conciliación y defensa judicial del ministerio de educación nacional en el que presenta formula conciliatoria. (fl.65).
- Sustitución de poder conferido a ANGELA VIVIANA MOLINA MURILLO (fl. 69).
- Acta de conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 3 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, por la cual se suscribió acuerdo conciliatorio entre **MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS y LA NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** (fls.70-78).

Así las cosas, procede el Despacho a definir si aprueba o no la conciliación prejudicial, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al *"Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación"*.

Mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho 1069 de 2015, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2009, se determinaron los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Parágrafo 3°. Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.

Parágrafo 5°. El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”

Si bien es cierto que la conciliación extrajudicial en materia administrativa es una de las vías más rápidas y no litigiosas para la resolución de conflictos, no es menos cierto que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo conciliatorio son los siguientes, como lo señala la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad 1998-00249-01 (28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio, que si bien se profirió en vigencia del derogado Código Contencioso Administrativo, de manera conceptual ilustra de forma veraz las exigencias para aprobar lo acordado, en efecto señaló la Corporación:

“1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).

3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbadada.

Acorde a los lineamientos expresados, **EL DESPACHO APROBARÁ LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** por los siguientes motivos:

1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas.

El Despacho precisa que la conciliación adelantada conforme los medios de prueba allegados al plenario, surte sus efectos para el reconocimiento y pago de la aludida sanción moratoria, toda vez que hubo un pago tardío de las cesantías definitivas, que tal como lo reconoce la entidad convocada fue de **151 días**. Correspondiendo el reconocimiento de 151 días de salario a favor de la convocante por tal omisión.

Ahora bien, en este caso, al demandarse la existencia, y posterior nulidad, de un acto ficto o presunto negativo, respecto de las peticiones de reconocimiento y pago de sanción moratoria realizadas el 10 y 31 de octubre de 2019, la norma que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar la caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho es la contenida en el artículo 164, numeral 1 literal d) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con la cual se puede demandar en cualquier tiempo cuando el acto acusado es un acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo, como ocurre en este caso.

Así las cosas, se concluye, que dentro del presente asunto no se ha configurado la caducidad del medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.

Se observa que el reclamo se refiere de manera concreta al pago de los valores adeudados por concepto de la sanción moratoria por mora de **151 días** en el pago de las cesantías definitivas que habían sido reconocidas a través de resolución 2032 del 28 de febrero de 2018, siendo un asunto que si bien concierne derechos laborales, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo, se verifica que la convocante tiene derecho a los emolumentos reclamados, pues así se desprende de la formula conciliatoria presentada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional.

3. Las partes están debidamente representadas.

La convocante actuó mediante apoderado con facultades para conciliar, conforme a los poderes visibles a folio 7 del expediente.

Así mismo, la entidad convocada, actuó a través de apoderado judicial, conforme a los poderes visibles a folios 46 y 69 del expediente.

4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.

La convocante, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por mora de 151 días en el pago de las cesantías definitivas que fueron solicitadas el 14 de septiembre de 2017, reconocidas a través de resolución 2032 del 28 de febrero de 2018, y puestas a disposición y/o pagadas el 29 de mayo de 2018.

Al respecto, la ley 1071 de 2006, *“por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”* materia que regula la mora en el pago de las cesantía, en sus artículos 4 y 5, establece:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los petitionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al petitionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Ahora bien, mediante certificación expedida por el SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL se señalaron los valores totales objeto de conciliación y respecto de los cuales ha de efectuarse el reconocimiento, de la siguiente manera:

“Fecha de solicitud de las cesantías: 14/09/2017

Fecha de pago: 29/05/2018

No. de días de mora: 151

Asignación básica aplicable: \$ 3.397.579

Valor de la mora: \$17.101.148

Propuesta de acuerdo conciliatorio: \$14.535.975 (90%)”

Ahora bien, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se cumplirá la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio, se tiene que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional en Sesión No. 41 del 1° de octubre del 2020, determinó que las condiciones generales en que se reconocerán las controversias suscitadas frente al reconocimiento y pago de la mora será el siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, numerales 3.2 y 3.5 del Acuerdo No. 001 de 1 de octubre de 2020, la presente propuesta se encuentra estructurada conforme a la información suministrada en la convocatoria a conciliar, en razón a que la sanción moratoria es un derecho de carácter discutible y conciliable, que se reclama a través de la denominada justicia rogada. Lo anterior, atendiendo a que corresponde a las entidades estatales la salvaguarda del patrimonio público.

Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL)

No se reconoce valor alguno por indexación.

La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.

Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo)”

En consecuencia, es procedente que la entidad realice el pago de los valores adeudados al servidor público por concepto de mora de 151 días en el pago de las cesantías definitivas pues como ha quedado evidenciado la convocante tiene derecho a dicho reconocimiento, toda vez que, la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se realizó el 14 de septiembre de 2017, y solo hasta el 29 de mayo de 2018, fue que se realizó el desembolso y/o pago de las cesantías definitivas.

En tal virtud, el presente acuerdo no es vulneratorio del ordenamiento jurídico, cuenta con las pruebas necesarias y no es lesivo a los intereses y patrimonio de la entidad convocada, al tratarse de derechos prestacionales a los que tiene derecho la convocada.

5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.

Según se observa a folio 65 del expediente, Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional en No. 41 del 1° de octubre del 2020, decidió conciliar el presente asunto a favor de la señor **MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS**, por la suma de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS(\$14.535.975.00) mcte.**

Lo anteriormente expuesto permite a este Despacho, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, **APROBAR** la conciliación extrajudicial suscrita

ante la Procuraduría 3 Judicial I para Asuntos Administrativos el 7 de diciembre de 2020, por los apoderados de **MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS** y de la **NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y la FIDUPREVISORA S.A.**, en razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del ente público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de efectuar el pago de unos valores adeudados a un exservidor público.

En virtud de lo expresado, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**,

RESUELVE

PRIMERO.- APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL celebrada 7 de diciembre del 2020, dentro del expediente radicado con el número E-2020-379853 del 9 de julio de 2020, suscrita entre el abogado **ANDRES SANCHEZ LANCHEROS**, en su condición de apoderado de la convocante **MARIA TERESA GOMEZ DE PALACIOS**, y **ÁNGELA VIVIANA MOLINA MURILLO** en condición de apoderada sustituta de las convocadas, **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, ante la Procuraduría 3 Judicial I delegada para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO.-De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por expresa orden del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, en providencia de 25 de junio de 2014, expediente 2012-00395 (IJ), la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará merito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto Único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de seis mil pesos (\$6.000) en la cuenta del Arancel Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia.

TERCERO.- Una vez cumplido lo ordenado en el numeral anterior archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CA



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **17 DE FEBRERO DE 2021**, a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.)

Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO**

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

343b94fc95322c10673dd7ec59859cbc74a9d4d837261e19416267cde6b4fe7e

Documento generado en 16/02/2021 12:32:31 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>